



PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS
POLÍTICO, NO. 61

OCTUBRE 2011

En la recta final para las elecciones

La importancia de estas elecciones

En la medida en que ha ido avanzando la campaña electoral, es cada vez más evidente la importancia que tiene para el país el que los ciudadanos asistan a depositar su voto el día de las elecciones, pero además, que se conviertan en observadores de su derecho ciudadano y de la voluntad de la mayoría.

Efectivamente, aunque para las autoridades electorales y otras instituciones estatales el proceso parece transcurrir con total "normalidad", diversas encuestas de opinión dan cuenta de la gran desconfianza de los ciudadanos en la transparencia de este proceso y la conducción que de él ha hecho el Consejo Supremo Electoral, CSE, debido a las múltiples irregularidades que se han venido sucediendo a su alrededor desde mucho antes de que se iniciara oficialmente la competencia electoral.

Entre las principales irregularidades se señalan la candidatura del actual presidente Daniel Ortega, el control del FSLN y algunos partidos aliados sobre las juntas receptoras de votos con la venia del CSE, las restricciones a la observación electoral nacional e internacional, cambios en los procedimientos para la verificación del padrón electoral, y una de las irregularidades más graves: la falta de entrega de cédulas a decenas de miles de ciudadanos y la entrega selectiva a simpatizantes del partido de gobierno por parte del CSE.

Apocos días de celebrarse las elecciones nacionales programadas para noviembre del año 2011 en Nicaragua, el escenario electoral está prácticamente listo. La campaña casi ha terminado, los candidatos se han dado a conocer todo lo que han podido y sus propuestas electorales han sido presentadas. Muchos votantes han ido tomando posición a lo largo de estos meses y algunos todavía no se han decidido.

Aunque el proceso electoral ha transcurrido con muchas sombras, permanece la certeza de su importancia para el país. Por eso, es importante hacer un recuento de los hitos que lo han marcado para dimensionar el carácter de estas elecciones y sus posibles consecuencias.



PERSPECTIVAS es una publicación del Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), y es parte del Observatorio de la Gobernabilidad que desarrolla esta institución. Está bajo la responsabilidad de nuestro equipo de investigadores: Elvira Cuadra, Angel Saldomando y Sofía Montenegro.

Si desea recibir la versión electrónica de este suplemento, favor dirigirse a: cinco@ibw.com.ni

Esta última irregularidad ha generado numerosas protestas en diferentes localidades del país, especialmente en la zona norte donde se han producido sucesivos acontecimientos de violencia con saldo de personas heridas y detenidas. Otros acontecimientos de violencia política relacionados con la campaña fueron la agresión sufrida por partidarios de la alianza PLI en un acto realizado en Masaya, por parte de simpatizantes gubernamentales y el estallido de una bomba realizado contra una radio de tendencia liberal en la localidad de Rosita, con resultado de dos personas lesionadas.

Aún con esas irregularidades, hay indicios de una alta disposición de los votantes para asistir a las urnas el día de las elecciones debido a que comprenden la importancia que tienen en este caso particular. La percepción de que estas elecciones han sido poco transparentes y la alta desconfianza en la conducción del CSE, ha promovido en los ciudadanos una actitud de defensa de los votos, sobre todo por el antecedente de fraude ocurrido en las elecciones municipales del año 2008. A ello contribuye la férrea negativa del CSE de acreditar a los observadores nacionales para este proceso.

Desde el punto de vista de algunos analistas y líderes políticos, la importancia de estas elecciones es similar a las de 1990, cuando el país se debatía en el dilema de la continuidad de la guerra. En esta ocasión, se argumenta que el país se encuentra en una situación similar en la cual los ciudadanos tienen que decidir entre la continuidad de un régimen que ha pasado por encima de las leyes y la Constitución para mantenerse en el poder, o se va a retomar la senda democrática. Pero además, porque

el futuro que se avizora si se deslegitima el voto ciudadano, es sombrío y está cubierto por el fantasma de la violencia. Ese es el contexto en que los ciudadanos van a elegir a sus nuevos gobernantes en estas elecciones y en el que los candidatos tratan de conseguir sus votos.

De la campaña permanente a la reelección

El eterno candidato del FSLN,



Daniel Ortega, no perdió el tiempo desde que llegó nuevamente a la presidencia en el 2007. Ha estado en campaña desde entonces y ha construido a fuerza la certeza de que su reelección es legítima a pesar de la prohibición expresa de la Constitución, la cual logró sortear con un subterfugio legal de la Corte Suprema de Justicia.

Este subterfugio fue posible gracias a la crisis institucional generada por el empantanamiento en la renovación de los funcionarios públicos en diversos poderes del estado, una oportunidad de oro que el presidente aprovechó muy bien para subordinarlos totalmente a cambio de asegurarles su permanencia en los cargos a través de un decreto presidencial. La subordinación al control político del gobierno fue total. Ni un sólo funcionario tuvo la decencia

de dimitir ante el vencimiento de su mandato.

De ahí en adelante, la sucesión de violaciones a la ley y la Constitución tanto de parte del presidente como del CSE y la CSJ han terminado por disolver el estado de derecho, y han dado paso al surgimiento de un gobierno de facto, en el cual el balance de poderes y el peso de las demás instituciones estatales no es más que una representación simbólica con un muy delgado barniz legal.

Así se llegó a la espuria aprobación del eterno candidato-presidente. Pocos recuerdan quizá que amparado en una trayectoria similar, Daniel Ortega se erigió a sí mismo en el líder único del FSLN, eliminando toda posibilidad de alternancia y disolviendo la poca institucionalidad interna del partido, tal como lo pudieron constatar todas las disidencias internas desde el 90 hasta la

actualidad. En su nuevo período de gobierno, el control del partido y del estado disolvió la frontera entre institucionalidad, gobierno y poder político partidario. El hombre fuerte y su grupo es todo y uno al mismo tiempo, apuntando a un tipo de régimen político centralizado y autoritario, que relega las elecciones a una simple validación de esa estructura y la distribución de los roles secundarios entre facciones y personas que juegan el papel de oposición.

De allí que el tema de la continuidad de Ortega haya ocupado todo el escenario político del país desde antes de la campaña, y durante ella, contaminado toda la legalidad y la legitimidad del proceso electoral.

La oposición en su laberinto

Desde las controvertidas fraudulencias en las elecciones municipi-

pales del 2008, la oposición se encontró en un camino con dilemas que no pudo resolver. Birlados casi 40 municipios, incluida la capital Managua, todo el andamiaje de coexistencia política e institucional amenazaba con derrumbarse. La oposición intentó crear una correlación de fuerzas contestando los resultados, movilizándose y apoyándose en los pocos espacios institucionales disponibles. En los hechos el gobierno la arrinconó con la represión y el control institucional, desplegando toda su fuerza y mostrando sin tapujos la fusión Estado-gobierno-partido, en la cual se pudo observar, por ejemplo, a magistrados de la CSJ al frente de manifestaciones partidarias, un CSE controlado, y una policía obsecuente con los desmanes oficiales.

La oposición tenía que elegir entre subir la parada o capitular, y capituló. Al final los alcaldes usurpadores se instalaron en las sillas edilicias, nadie quiso perder su puesto ni asumir el riesgo de una ruptura política e institucional de altos costos. Las elecciones del 2008 quedaron como un antecedente en la historia del país, pero también como el escenario definitivo de las siguientes elecciones presidenciales. La oposición liberal oficial quedó en evidencia como un sector absolutamente torpedeado por los amarres con el gobierno y el lastre del pacto con Arnoldo Alemán.

Entre 2008 y 2010, el proyecto presidencial pareció avanzar sin obstáculos y solamente se escucharon las voces de la sociedad civil, algunos sectores políticos disidentes del liberalismo controlado por Alemán y las de la disidencia del sandinismo oficial.

Estas fuerzas políticas mantuvieron la presión para generar una oposición fuera del escenario controlado por Ortega y lograron

ticamente anuladas. El revés más serio en la intención de votos lo ha sufrido el candidato del PLC, Arnoldo Alemán.

Elecciones y programas

Paradójicamente, pese a este complicado escenario, el debate sobre los programas y las propuestas electorales ha sido el más pobre de todas las elecciones en las últimas dos décadas. De las cinco fuerzas políticas en competencia, cuatro presentaron propuestas y de esas solamente dos pueden ser consideradas como tales. Pero, aparte de las presentaciones, no hubo en realidad debate público sobre los contenidos porque la pugna entre la reelección y la búsqueda de una alternativa, consumió todo el debate.

Hay varias razones para este empobrecido clima de debate político en tiempo de elecciones, y es que en el fondo se ha producido un congelamiento en el debate sobre las opciones. La estabilidad macroeconómica, el aval del FMI al gobierno, un crecimiento económico promedio regular, clientelismo político con los programas gubernamentales, bajo perfil empresarial y oportunidades de negocios apalancadas oficialmente, forman parte del acuerdo entre las elites.

El escenario se asemeja mucho con el período en el que se negociaron las reformas económicas privatizadoras y el acuerdo de las elites políticas y económicas al respecto. En esa oportunidad se impidió el debate sobre el tema y desde la primera mitad de los 90 el país tuvo que esperar hasta inicios de este siglo



mantener el espacio crítico y deliberativo, así como la posibilidad de manifestarse públicamente. Aunque estas fuerzas políticas y la presión que realizaron no lograron constituir un proyecto político de oposición consistente, finalmente pudieron encontrarse bajo un común denominador orientado a luchar por la apertura política. Así se forjó la candidatura de Fabio Gadea, como una tentativa para abrir el escenario político, pero aún más que eso, representa la oportunidad de vincular nuevamente legalidad y legitimidad.

Todo indica que la intención de voto se ha concentrado entre el candidato oficialista y esta opción, pulverizando en el medio a las otras agrupaciones políticas de oposición, que han quedado prác-

para que la pobreza emergiera como tema estructural de política pública. La continuidad económica asentada en este limitado consenso ha tenido consecuencias reales. En primer lugar, se bloqueó toda discusión de fondo sobre la situación del país en temas como el empleo, la reducción de la pobreza, la emigración, la descentralización, la reforma tributaria, la calidad del gasto público y la corrupción.

Además, otra consecuencia es que el debate en torno a la fragilidad de la situación política e institucional, y cómo el estado de estado de las instituciones juega un papel condicionante, positivo o negativo, en el crecimiento económico y la inversión privada, se volvió artificial. No tanto porque no exista, sino porque no tiene actores con poder económico que lo promuevan.

Quienes han intentado establecer la relación entre la calidad de las instituciones, el crecimiento y la inversión, lo han intentado desde una visión bastante limitada. Si la calidad de las instituciones condicionara al capital, no habría inversiones en tantos estados con bajos estándares en esa materia. En realidad, lo que importa es la rentabilidad del capital y el retorno de este a sus propietarios, asunto que en Nicaragua está asegurado entre las elites, incluida la nueva conformada por el gobierno actual y sus allegados.

La calidad de las instituciones importa para la democracia, los derechos, la equidad y la reducción de la pobreza. Eso significa actores sociales movilizados, políticas públicas y presiones redistributivas sobre el tipo de modelo económico. En Nicaragua, esa relación simplemente no existe en un gobierno clientelista donde todo depende del "líder".

El accidentado camino de las elecciones

La fiesta cívica, como acostumbra llamarse a las elecciones, ha tenido un camino muy accidentado en esta ocasión. El largo preludio en el que se juntan el estatus de facto del CSE, las decisiones arbitrarias, la desconfianza generalizada, los obstáculos para obtener las cédulas de identidad,



la observación aceptada a última hora, selectiva y en condiciones precarias, las impugnaciones en suspenso, la verificación insuficiente del padrón electoral y los episodios conflictivos, hacen temer los malos presagios. Ciertamente, estos acontecimientos son lo menos parecido a una fiesta cívica.

La realidad de estas elecciones muestra la dimensión de un país fragilizado al extremo. No ha sido la fortaleza de sus instituciones ni el acuerdo político lo que permitido llegar hasta aquí bajo la administración Ortega. Ha sido el poder del aparato político de Ortega el que ha impedido la posibilidad de ser contestado. A la sombra del estado y con una capacidad de cooptación enorme, ha neutralizado a las fuerzas políticas e instituciones de manera

que fuera del escenario controlado por el gobierno solamente una candidatura representa una alternativa real.

La deriva en la que Daniel Ortega embarcó al país, es riesgosa. El fundamento de su gobierno requiere altas dosis de discrecionalidad y subordinación para no ser impugnado en su legalidad y legitimidad, pero además, para no tener que rendir cuentas y ser controlado por los ciudadanos. Continuar en esa línea requiere conseguir un apoyo aplastante o mantener su capacidad de poder discrecional.

Su proyecto político espera que ambos resultados salgan de las urnas este 6 de noviembre, pero si sus planes no ocurren así como se espera, es evidente que están dispuestos a recurrir a otros métodos tal como quedó demostrado y ensayado en las elecciones municipales del 2008. El actual gobierno no puede permitirse una derrota política. Ser el mesías del pueblo no admite la eventualidad de que el mismo pueblo lo envíe a la jubilación. Pero ese arriesgado proyecto político dejaría al país sujeto a una estructura de poder dura, que limita la democracia y cuyo desmontaje costaría nuevas y más graves crisis.

Nicaragua se encuentra, quizás, al final de un ciclo histórico. Los personajes que protagonizan esta contienda electoral representan, por su edad y trayectoria, todo lo que se hizo, lo que se pudo hacer y lo que salió mal. Lo menos que se puede esperar es que estas elecciones sean las últimas del pasado y las primeras en un nuevo camino para el relevo y el cambio. No será fácil, pero es posible.